



Juzgado Segundo Civil del Circuito de Soacha - Cundinamarca

Tipo de Proceso	Acción de Tutela		
Radicación del Proceso de Juzgado de origen 257544189001 202300856 00			
Radicación del Proceso 257543103002 202320084			
Accionante	Olga Marina Hernández Pinzón como agente oficiosa de su señora madre Teresa Pinzón de Hernández		
Accionado	Salud E.P.S.		
Derecho	Salud	Decisión	Confirma
Soacha, tres (03) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)			

Asunto Para Tratar

Procede el Despacho a resolver la impugnación del fallo de Tutela proferido el día veinticinco (25) de septiembre de dos mil veintitrés (2023) por el **Juzgado Primero (1°) Civil Municipal de Soacha - Cundinamarca**, el cual tuteló el derecho fundamental a la salud en conexidad con la vida digna, incoados por la accionante; a folio digital [009FalloAmparaSalud202300856.pdf](#)

Solicitud de Amparo

La señora **Olga Marina Hernández Pinzón** como agente oficiosa de su señora madre **Teresa Pinzón de Hernández**, interpuso acción de tutela, de conformidad con los hechos obrantes en el escrito tutelar. [004EscritoTutela.pdf](#)

Trámite

El Juzgado Primero (1°) Civil Municipal de Soacha - Cundinamarca, admitió la acción de tutela por medio de proveído el día doce (12) de septiembre de dos mil veintitrés (2023), en el cual ordenó notificar a las partes, para que ejercieran su derecho de defensa. [005AutoAvocaTutela202300856.pdf](#).

El fallador de primera instancia estudió el derecho amenazado, y de acuerdo con el principio de informalidad el cual le corresponde al juez identificar y proteger, tuteló el derecho fundamental a la salud en conexidad con la vida digna, incoados por la accionante.

Por lo que en su oportunidad la accionada Salud Total E.P.S., impugnó el fallo proferido por el Juez de primera instancia.

Habiendo correspondido por reparto a este Juzgado, se admite la impugnación al fallo aludido, mediante auto calendarado el día dos (02) de octubre de dos mil veintitrés (2023). [0005AutoAdmitelImpugnacion20231002.pdf](#).

Impugnación

En el expediente digital obran escritos de impugnación, donde la accionada Salud Total E.P.S., plantea su inconformidad. [011EscritoImpugnacion.pdf](#).

Fundamentos de la Decisión

Problema Jurídico

En este asunto corresponde al Despacho resolver, si lo decidido por el Juez de primera instancia corresponde a un actuar legítimo del fallador, qué en últimas se concretó, que el juez de instancia cometió un yerro al ordenar la entrega de la silla de ruedas en el término de 48 horas; sin tener en cuenta que dicho insumo requiere de una programación de toma de medidas y de una importación en la que se lleva a cabo el término de 45 días aproximadamente para poder generar la entrega bajo las especificaciones ordenadas.

Competencia

Este despacho es competente para conocer del asunto, de acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política y con los Decretos 2591 de 1991 y 306 de 1992, lo que indica que toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad e incluso de particulares.

Asunto	Acción de Tutela
257543103002 202320084	
Soacha, tres (03) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)	

La acción de tutela constituye un mecanismo encaminado a la protección efectiva de los derechos fundamentales de las personas, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por cualquier autoridad e incluso en algunos casos por los particulares.

Desde el plano del propio funcionamiento estatal, también es posible identificar un cambio a partir de la Constitución de 1991, porque los fines que se predicen de nuestra organización política, los principios que se defienden en la Carta de Derechos y la estructura que se construye tras la idea de la función pública, exige la participación de todos los servidores públicos –sin importar cuál sea el contenido material de sus actos- y una aplicación de las normas vigentes que son tomadas como el inicio de la tarea de protección y garantía de los derechos.

Contenido de la Decisión

De acuerdo con los argumentos planteados por la impugnante, el análisis que está Juzgadora debe realizar es sí el fallo del a quo en efecto es acertado. Se procede al análisis del caso en concreto, en aras de dar respuesta al problema jurídico planteado de acuerdo con los diferentes documentales arrojados al plenario.

Caso Concreto

De las diferentes pruebas recaudadas en el plenario se interpreta que la inconformidad radica, en que, el juez en primera instancia ordeno la entrega de la silla de ruedas en el término de 48 horas; sin tener en cuenta que dicho insumo requiere de una programación de toma de medidas y de una importación en la que se lleva a cabo el término de 45 días aproximadamente para poder generar la entrega bajo las especificaciones ordenadas

Este despacho considera pertinente, citar a la Honorable Corte Constitucional, quien en varias oportunidades se ha pronunciado con respecto al derecho fundamental a la salud y los principios de integralidad y continuidad, como ocurren en el caso objeto de estudio, a lo anterior la Sentencia T 015/21 establece que:

“El derecho a la salud tiene una doble connotación: (i) es un derecho fundamental autónomo e irrenunciable cuyo contenido y alcance ha sido definido por el legislador estatutario y por la jurisprudencia constitucional, (ii) es un servicio público que, de acuerdo con el principio de integralidad, debe ser prestado de “manera completa”, vale decir, con calidad y en forma eficiente y oportuna.

Esta Corporación se ha referido a la integralidad en la prestación de los servicios de salud como la atención y el tratamiento completo a que tienen derecho los usuarios del Sistema de Seguridad Social en Salud, de conformidad con lo prescrito por el médico tratante. Según la Sentencia C-313 de 2014 que ejerció el control previo de constitucionalidad de la Ley Estatutaria que regula el derecho fundamental de salud, el principio de integralidad irradia el sistema, determina su lógica de funcionamiento y envuelve la obligación del Estado y de las entidades encargadas de la prestación del servicio de adoptar todas las medidas necesarias encaminadas a brindar un tratamiento que efectivamente mejore las condiciones de salud y calidad de vida de las personas. También ha reconocido la Corte, que cuando no es posible la recuperación de la salud, en todo caso deben proveerse los servicios y tecnologías necesarios para sobrellevar la enfermedad manteniendo la integridad y dignidad personal del paciente, de modo que su entorno sea tolerable y adecuado.

Uno de los elementos esenciales del principio de integralidad del servicio de salud es la garantía de su prestación sin interrupciones y es por ello que el legislador estatutario estableció el principio de continuidad, como el derecho a recibir los servicios de salud de manera continua, de manera que “una vez la provisión de un servicio ha sido iniciada, este no podrá ser interrumpido por razones administrativas o económicas.”

La jurisprudencia constitucional también ha desarrollado ampliamente el derecho a la continuidad en el servicio de salud para lo cual ha establecido y reiterado criterios que deben tener en cuenta la Entidades Promotoras de Salud a fin de garantizar la continuidad de tratamientos médicos ya iniciados. Así mismo, la Corte ha identificado una serie de eventos en los que las EPS no pueden justificarse para abstenerse de continuar con la prestación de estos servicios, en razón de los principios de efectividad y eficiencia pero también “en virtud de su estrecha relación entre el acceso efectivo al Sistema de Salud, como servicio público, y el postulado de confianza legítima, derivado del principio de la buena fe (art. 83 de la C.P.), según el cual, los ciudadanos gozan de la certeza de que su entorno no sufra modificaciones abruptas que no desarrollen un fin constitucional legítimo. En el ámbito de la salud, tal certeza se materializa en la garantía de que a los afiliados no se les interrumpirá injustificadamente su

Asunto	Acción de Tutela
257543103002 202320084	
Soacha, tres (03) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)	

tratamiento médico” o cualquiera que sea el servicio de salud que se esté prestando, cuya interrupción ponga en peligro los derechos fundamentales a la salud, a la integridad o a la dignidad de los pacientes.” (Sentencia T-015/21, 2021)

De lo anterior se infiere que el fin del servicio público de salud es garantizar el cumplimiento del principio de integralidad, donde los servicios de salud deben ser suministrados de manera completa sin importar el origen de la enfermedad o condición de salud, por lo tanto, no puede fragmentar la responsabilidad en la prestación del servicio de salud específico frente a la salud del usuario, sin ser interrumpida por razones administrativas o económicas. Aún más, cuando estamos frente a la protección reforzada por un sujeto de especial protección constitucional, tal como ocurre en el caso objeto de estudio, mujer adulto mayor de 71 años de edad; pues su estado es de mayor vulnerabilidad y debilidad, a lo anterior es merecedora de protección reforzada por parte del Estado y aún más de las entidades prestadoras de los servicios en salud.

Avizora esta Juzgadora, que la entidad accionada **Salud Total E.P.S.**, puso en conocimiento al a quo, la autorización de la silla de ruedas, la cual fue valorada por la IPS Roosevelt, como se evidencia en a folio digital interno 05 [007RespuestaSaludTotal.pdf](#), indicando que se aneó desde el área de cartera el trámite de compra que se lleva a cabo, tiempos de fabricación ya que el insumo es importado, y una vez se haga la entrega de la silla se notificara.

Siendo este argumento para confirmar la decisión tomada por el *aquo*, como quiera que ha transcurrido el término solicitado por la accionada.

En mérito de lo expuesto, este juzgado en instancia de juez de tutela en nombre de la República de Colombia y por mandato de la Constitución y la ley.

Resuelve
 <p style="text-align: center;">Juzgado Segundo Civil del Circuito de Soacha - Cundinamarca</p>

Primero: Confirmar el fallo proferido el día veinticinco (25) de septiembre de dos mil veintitrés (2023) por el **Juzgado Primero (1°) Civil Municipal de Soacha - Cundinamarca**, de conformidad con la parte motiva de la presente providencia.

Segundo: Notifíquese de esta decisión a las partes involucradas por el medio más expedito.

Tercero: Cumplido lo anterior, remítase la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y Cúmplase


Paula Andrea Giraldo Hernández
 Juez


Firmado Por:
Paula Andrea Giraldo Hernandez
Juez Circuito
Juzgado De Circuito
Civil 002
Soacha - Cundinamarca

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **26cf893eed1ec90a743c87b4814ebae196d0c9defabd3c81e91842792c32a761**

Documento generado en 03/11/2023 12:49:26 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>